

REVISTA

de la

C E P A L

NUMERO 51
DICIEMBRE 1993
SANTIAGO DE CHILE

ANIBAL PINTO
Director

EUGENIO LAHERA
Secretario Técnico



NACIONES UNIDAS

SUMARIO

Inauguración de la Sala Fernando Fajnzylber y lanzamiento de la Revista de la CEPAL Nº 50	7
<i>Gert Rosenthal y Alejandro Foxley</i>	
Las transnacionales y la industria en los países en desarrollo	15
<i>Michael Mortimore</i>	
¿Dónde estamos en política industrial?	37
<i>Wilson Peres Núñez</i>	
El desafío de la competitividad industrial	51
<i>Rudolf M. Buitelaar y Leonard Mertens</i>	
Integración y desintegración social rural	71
<i>Martine Dirven</i>	
Los pueblos indígenas y la modernidad	89
<i>John Durston</i>	
Productividad y trabajo de la mujer en los Estados Unidos	101
<i>Inés Bustillo y Nancy S. Barrett</i>	
Efectos de las corrientes de capital sobre la base monetaria	111
<i>Helmut Reisen</i>	
Viejas y nuevas políticas comerciales	123
<i>Daniel Lederman</i>	
Integración y desviación de comercio	133
<i>Renato Baumann</i>	
Integración europea y comercio latinoamericano	149
<i>Miguel Izam</i>	
El actual debate sobre los recursos naturales	163
<i>Fernando Sánchez Albavera</i>	
Orientaciones para los colaboradores de la Revista de la CEPAL	179
Publicaciones recientes de la CEPAL	180

Integración y desintegración social rural

Martine Dirven

Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL

En la segunda mitad del siglo XX, los diversos estamentos de la sociedad rural se han visto enfrentados a grandes cambios. Entre éstos se hallan las reformas (y contrarreformas) agrarias; la modernización tecnológica y de la sociedad; la presión demográfica; el aumento del trabajo temporal en desmedro del trabajo permanente; las migraciones; el reemplazo de regímenes autoritarios por regímenes democráticos (y viceversa); los procesos de descentralización; el acceso a los medios de comunicación masiva, y la influencia de estos medios. Este artículo bosqueja algunos de los efectos que han tenido tales cambios en los procesos de integración y desintegración social en el mundo rural, y los relaciona con escritos recientes sobre la teoría social. Por lo hondo de los cambios, y también por los procesos de aculturación que experimentan los jóvenes, se había esperado encontrar en la bibliografía un mayor énfasis en los procesos de desintegración social. Sin embargo, es en la formación de movimientos y en los fracasos y sobre todo en los éxitos de las movilizaciones reivindicativas que ella se centra.

I

Introducción

En el área rural se dan varias grandes tendencias que en algunos casos son causa y en otros consecuencia de procesos de integración y desintegración social. Estas tendencias apuntan, entre otras cosas, a la desaparición de las estructuras latifundiaras y de las relaciones amo/súbdito; la modernización de la sociedad en general y la disminución del peso de las tradiciones culturales y familiares; el cambio en la estructura productiva, la importancia mayor del mercado y la utilización creciente de mano de obra temporal; las migraciones temporales y definitivas con los cambios demográficos consecuentes; la transición desde la familia extendida hacia la familia nuclear, el aumento del trabajo remunerado de la mujer y su cambio de posición en el seno de la familia; las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos y su incidencia sobre las organizaciones gremiales, cooperativas y otras; los recientes esfuerzos de descentralización regional, y las perspectivas de mayor organización y participación en el ámbito local.

A la vez, se precisan cambios en algunas estructuras sociales vigentes, y nuevas formas de organización social que permitan adaptarse a un mundo en perpetua evolución sin pérdida de la identidad propia o de la cohesión social, para asegurar la participación activa de la población rural en los procesos de modernización de la producción y de la sociedad en general, así como en los de democratización y de descentralización (Benado, 1992).

Es por lo tanto importante tratar de entender las

causas y efectos de los procesos de integración y de desintegración social y proponer medidas y políticas tendientes a lograr que estos procesos contribuyan al desarrollo socioeconómico del área rural y que no evolucionen en su detrimento.

De la bibliografía reciente, hemos seleccionado cuatro elaboraciones teóricas que parecen pertinentes para explicar algunos de los motivos que llevan a actuar de un modo u otro frente a situaciones dadas o a cambios percibidos. La primera concierne a los elementos que conducen a la participación o no participación de un individuo en una acción de grupo para alcanzar un bien común. La segunda concierne al concepto de identidad que tiene un individuo de sí mismo y cuáles son sus mecanismos de defensa o la tensión que resulta cuando hay cambios en su entorno o cuando la percepción de sí mismo no coincide con la de los demás. La tercera concierne a la conformidad con las normas sociales y los costos de la no conformidad, y la cuarta concierne a las relaciones de poder y los beneficios mutuos de las partes involucradas.

No se ha querido abordar en este trabajo las formas organizadas de reacción social disruptiva, como los movimientos guerrilleros y las organizaciones ligadas al tráfico de drogas, porque aunque ellas obedecen a percepciones de falta de otras oportunidades y de otros canales de negociación y a frustraciones y rebeliones, también son el resultado de injerencias, apoyos y situaciones de carácter externo que son ajenos a este análisis.

II

La participación en una acción colectiva

Los procesos de decisión pueden ser paralelos o seriales. En la decisión paralela, cada individuo decide participar sin conocer o tomar en consideración las decisiones de los demás. En la decisión serial, cada individuo observa lo que los demás hacen y necesita ver que un número mínimo —en su opinión— participe, para decidir su propia participación. Las decisiones de participar en una huelga, de migrar, de utilizar

anticonceptivos o de ir al colegio serían todas de carácter más bien serial. También se ha observado que, aun frente a la necesidad de una acción urgente, la gente tiende a ser renuente a participar de inmediato —aunque a veces los costos sociales de la no cooperación sean altos— y de esperar a ver qué va a pasar y quiénes más toman la decisión de actuar. Esta espera inicial parece ser parte del mismo proceso que final-

mente induce a una repentina participación activa. En cambio, la acción colectiva tiende a fracasar cuando se tiende a tomar decisiones sin preocuparse por lo que los demás hacen.

Puede pensarse que, para participar en una acción colectiva, el individuo obedece estrictamente a criterios de utilidad marginal para sí mismo, es decir, que sólo se hará si considera que su inversión personal a través de la participación será rentable y que su participación hará una diferencia en los resultados que obtenga el grupo. Si bien es cierto que se ha demostrado que los individuos que pueden ganar más a través de la acción colectiva son los que hacen los mayores esfuerzos, y que los que tienen más son los que menos se involucran, cualesquiera sean los beneficios adicionales que les pueda significar la acción común, es probable que también se dejen influir por otros motivos, como el número de los que ya participan o el entusiasmo que despierta una movilización exitosa, independientemente de si el resultado beneficia más a la colectividad que al individuo. En otras palabras, es necesario mirar la teoría de la utilidad marginal con cierta flexibilidad cuando se estudian las motivaciones para participar en una acción colectiva.

Asimismo, la densidad de la red de comunicación entre los individuos dentro de un grupo y entre un grupo y los demás influye en la velocidad con que se transmite información, en su precisión y en la importancia que se le da. Hay fuerte evidencia empírica que demuestra que los contactos sociales y la participación de familiares, seres cercanos o de peso en la comunidad, son conductos importantes para la participación en organizaciones, grupos de interés y movimientos sociales. La red de lazos sociales que interconectan a los miembros de una colectividad aminorará la posibilidad de que una reacción en cadena muera antes de que la movilización haya allegado una masa crítica. Un cierto provincianismo, con fuertes lazos entre los miembros de un mismo grupo pero con tendencia a aislarse de los demás, puede inhibir la movilización social si ésta se inicia fuera del grupo o trasciende el grupo.

La teoría de la decisión (o elección) racional predice que se logra reunir más rápidamente un número crítico de participantes cuando se puede descansar sobre los esfuerzos de unos pocos individuos altamente interesados e ingeniosos. En cambio, Michael M. Macy postula que si bien esta concentración de intereses y recursos puede explicar por qué la mayoría de las contribuciones vienen de un pequeño nú-

cleo de activistas dedicados, la acción colectiva que se basa en ellos no tiene necesariamente más probabilidad de ser exitosa que aquella con una base participativa más amplia (Macy, 1991, pp. 730-747).

La densidad de organizaciones influye sobre sus ciclos de vida. Así, cuando existen y surgen pocas, la legitimación para organizarse es débil y cuesta atraer recursos y miembros, lo que desemboca en altos índices de disolución. A medida que el número de organizaciones crece, su legitimación crece también. Una mayor legitimación facilita la obtención de recursos y, por lo tanto, ayuda a una mayor sobrevivencia. Este proceso sigue hasta que las organizaciones llegan a un número crítico, después de lo cual empiezan a competir entre sí para conseguir adherentes y recursos, y aumenta nuevamente la tasa de disolución (Petersen y Koput, 1991, p. 399).

La acción colectiva democrática es mucho más difícil en un entorno rural que en un entorno urbano. Varios elementos hacen que el costo inherente a la decisión de participar sea mayor para los habitantes rurales. De un lado, es más difícil reunir una masa crítica de participantes por la dispersión geográfica, por la diversidad de ocupaciones económicas, por la precariedad de la sobrevivencia familiar diaria. De otro, las fuerzas de coerción tanto públicas como privadas son mayores y la ausencia de los medios de comunicación masiva dificulta el acceso de la población rural a la información política y hace que ciertos actos de violencia queden impunes. Durante los períodos de transición hacia regímenes democráticos, las fuerzas políticas nacionales antidemocráticas a menudo se juntan con los autócratas rurales y el resultado puede ser un aumento de la violencia en las zonas rurales mientras se observan aperturas políticas a nivel nacional (Fox, 1990, pp. 1-4).

La falta de una masa crítica y la dispersión podrían explicar, por ejemplo, por qué en Argentina, en el decenio de 1980, menos del 4% de los asalariados agrícolas estaba sindicalizado. En ese país la población agrícola activa es poco numerosa (10% de la población económicamente activa en 1990), la modernización y el uso más intenso del factor capital han dado lugar a una proletarianización muy pronunciada de la mano de obra que vive en localidades de menos de 2 000 habitantes o directamente en el campo, lo que contribuye a su aislamiento, mientras que el campesinado tradicional ha desaparecido, salvo en algunas regiones marginales (Chonchol, 1990, p. 152).

También en Perú se nota falta de respuesta a un tema que se suponía tenía que despertar una reacción

fuerte. Si bien es cierto que la liquidación del régimen de la hacienda y la redistribución de tierras ha disminuido o hecho desaparecer el sistema de relaciones patrimoniales y de clientelismo, abriendo posibilidades de organización autónoma al campesinado, la liberalización del mercado de las tierras decretada por el Presidente Fujimori en 1991 —estableciendo, entre otras cosas, que las tierras campesinas pueden ser objeto de hipotecas, lo que elimina los vestigios de la reforma agraria de los años setenta— causó pocos debates o movilizaciones. Esta indiferencia, indecisión o indefinición de los posibles afectados demuestra que, si bien la reforma agraria modificó las relaciones entre las clases sociales de manera irreversible, no se ha logrado en estos 20 años sustituir el viejo orden oligárquico por estructuras que sirvan de apoyo a una nueva organización de la sociedad rural y de la producción agrícola. La cuasiausencia de la administración pública y de los partidos políticos en el área rural ha fomentado una serie de organizaciones heterogéneas que escapan al control del poder local (notables, comerciantes) y del Estado; sus acciones son a menudo esporádicas y su afiliación a organizaciones nacionales es generalmente laxa. El sufragio universal y la libertad de organización, así como la multiplicación de escrutinios municipales, regionales, parlamentarios y presidenciales, han significado para la mayoría una verdadera iniciación política. La existencia de asociaciones de padres, comités de riego, comités de producción o de comercialización, etc., con sus respectivos directorios elegidos, amplía la participación individual en el campo civil y público. Sin embargo, el carácter pluriétnico de la sociedad favorece la constitución de identidades locales y colectivas muy diferenciadas. Casi no existen canales institucionales con los poderes estatales y las perspectivas de acción de estas organizaciones de base son generalmente muy circunscritas. Aun para la defensa de los intereses económicos de la agricultura, las distancias entre las centrales sindicales que pretenden representar el área rural son enormes. Hasta el momento, el interés del Estado por la descentralización no ha sido acompañado por mecanismos eficientes que permitan tomar en cuenta y fortalecer una participación orgánica de estas organizaciones culturales, productivas, sindicales y políticas que constituyen el tejido social del área rural (Revesz, 1991, pp. 13 y 17-18).

En cambio, en Colombia, el Presidente Barco (1986-1990) hizo un esfuerzo por consolidar los ca-

nales institucionales entre el Estado y el campesinado, estableciendo, entre otros, un fondo estatal para financiar el funcionamiento regular de las organizaciones campesinas, su participación en el debate del Congreso sobre la reforma agraria y una mayor representación de sus delegados en los directorios de las agencias gubernamentales para el sector agrícola. En las áreas de desarrollo rural integrado (DRI) se procuró fortalecer los comités de beneficiarios, a los cuales se dio un papel directo en la toma de decisiones y en la evaluación del programa (Zamosc, 1990, p. 65).

Ejemplos positivos de formación de una masa crítica para actuar y de acciones que legitiman y fomentan más acciones ofrecen los movimientos huelguistas de los *boias frias* (jornaleros) y de los trabajadores rurales en Brasil, el movimiento de levantamiento indígena en Ecuador y el peso creciente de los sindicatos del Chapare en Bolivia.

En Brasil, el número de *boias frias* asciende hoy a por lo menos cuatro millones de personas. El aumento del cultivo de la caña a expensas de otros cultivos en el estado de São Paulo elevó el trabajo temporal asalariado, que se duplicó en diez años, así como el desempleo entre las dos cosechas anuales. En 1984 se inició una huelga de los *boias frias* de la fábrica de São Marinho en protesta por sus condiciones de trabajo. En un lapso de 15 días estallaron conflictos similares que involucraron un total de 48 000 *boias frias*. Las negociaciones dieron lugar a 27 acuerdos distintos. En 1985 se reanudaron varios movimientos huelguistas con la participación de 30 000 *boias frias*. El gobierno estadual decidió tomar medidas para evitar la repetición de los conflictos, entre otras cosas, porque temía que éstos pudieran poner en peligro el recién iniciado proceso de democratización. En este contexto nació el programa de *boias frias*. A pesar de que dicho programa tuvo un impacto limitado, mostró que los *boias frias* de la actual generación se identifican como poblaciones rurales y aspiran a una parcela de tierra para producir parte de su subsistencia, que integran fácilmente la producción directa de alimentos en su estrategia de supervivencia y consiguen buenos resultados, y que sus estrategias familiares se ajustan a sus múltiples actividades, entre las cuales figura el cultivo de la tierra para cubrir sus necesidades alimentarias (Chonchol, 1990, pp. 154-156). Otro movimiento importante es el de los trabajadores rurales sin tierra (MST). A pesar de que no tiene nexos orgánicos fuertes con otros movimientos sindicales ni con partidos políticos, el MST ha mostrado gran cohesión

y agilidad: por ejemplo, entre enero y junio de 1989 logró movilizar más de 10 000 familias sin tierra en 15 estados. Está organizado en núcleos locales y comisiones municipales y estatales, con un ejecutivo nacional que representa a 16 estados. Sin embargo, su base social es bastante restringida y trabaja en relativo aislamiento político. Los movimientos de los trabajadores rurales asalariados —que representan una clase social aparte en el Brasil— tienen características propias. Millones de trabajadores rurales viven de la venta diaria de su trabajo, y habitan generalmente en villorrios rurales o en la periferia de las ciudades. Son movimientos con organizaciones y bases geográficas muy diversas, están motivados por la defensa de los derechos del trabajador, definidos por la ley pero no respetados, y son especialmente fuertes en las plantaciones de azúcar del Nordeste (Pernambuco) y en São Paulo. Muchos de ellos están afiliados a la CUT (Grzybowski, 1990, pp. 33-36)

En junio de 1990 hubo en Ecuador un “levantamiento indígena” que se organizó al margen de los partidos políticos. Esta movilización se diferencia de otras que hubo en el país a lo largo de la historia porque la participación fue masiva y coordinada y porque casi no hubo violencia. El bloqueo de caminos y otras acciones no afectaron mucho a Quito, Guayaquil o Cuenca y muchos ecuatorianos se enteraron de lo sucedido sólo a través de los medios de comunicación. Sin embargo, el levantamiento llevó al gobierno a la mesa de negociaciones y tuvo más impacto del que esperaban los dirigentes indígenas, quizá porque tocó una fibra de “mala conciencia” colectiva entre los blancos y mestizos respecto de la población indígena. El resultado más importante e inmediato de ese levantamiento fue el de haber dado visibilidad y cierta legitimidad al movimiento indígena y despertado una suerte de simpatía para con este grupo cuya existencia y problemas afloraron de pronto. Las acciones de solidaridad por parte de organizaciones populares, estudiantiles y sindicales, así como de los partidos políticos, fueron numerosas, siendo que antes, con pocas excepciones, estos grupos nunca habían mostrado interés. Los artículos sobre los indígenas hasta hace poco habían estado relegados a la sección cultural de los periódicos, mientras que ahora los avances de las negociaciones se analizaban en detalle en las primeras páginas (Fassin, 1991, pp. 92-93 y 105).

Los sindicatos del Chapare, aunque fueron creados en los años sesenta, empezaron a adquirir gravitación nacional en los ochenta debido a su oposición

a las políticas para controlar la producción de coca y su movilización en contra de ellas. Hoy en día, los campesinos del Chapare (unas 40 000 familias) pertenecen a 160 sindicatos basados en las comunidades, bajo el alero de 30 centrales, que a su vez están organizadas en cinco federaciones. De éstas, la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (FETCTC) y la Federación de Carrasco reúnen el 85% de los sindicatos y a su vez son miembros de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTSB). Por sus acciones, han logrado movilizar también a campesinos de regiones no productoras de coca y sus protestas colectivas han conducido a acuerdos negociados con las autoridades en temas relacionados con la coca, y también en temas relacionados con la reforma a los impuestos sobre la tierra, que eran una reivindicación más bien de los campesinos de las regiones no productoras de coca. También han emprendido actividades de defensa de los valores culturales asociados al uso de la coca, a la propuesta de legislaciones y a programas alternativos de desarrollo rural. Asimismo, al principio de los años ochenta organizaron invasiones de propiedades pertenecientes a profesionales, empleados de gobierno, militares y grupos comerciales. El poder de convocatoria de los sindicatos del Chapare se ha vuelto tal, que quizá en este momento sea el más fuerte de Bolivia, y la Central Obrera Boliviana (COB) se ha mostrado ansiosa de asociarse a las protestas de los productores de coca, lo que nunca hubiera sucedido hace unos 10 años (Healy, 1991, pp. 88-121).

En varios casos los procesos de democratización han creado un espacio y han dado legitimidad a la organización y la acción de grupos gremiales y otros de reivindicación más puntual. Así, en Bolivia, si bien los primeros sindicatos campesinos fueron organizados en 1953 a raíz del programa nacional de reforma agraria, fue sólo en 1977, gracias a la apertura democrática del país, que fue fundada la CSUTCB, la confederación sindical más importante, que representa cerca de un millón de campesinos a lo largo del país. La CSUTCB se extiende a los más pequeños pueblos para incorporar a los hogares campesinos en su estructura organizacional, conectando comunidades, provincias y regiones con un liderazgo a nivel nacional en La Paz.

En Chile, las cooperativas fueron objeto de fuertes persecuciones durante el régimen militar que se extendió de 1973 a 1989. Según la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas (CAMPOCOOP),

hoy en día existen 87 cooperativas campesinas federadas y 29 cooperativas no federadas en el país. En junio de 1992 se realizó la primera reunión de la Comisión Asesora Consultiva para el desarrollo del cooperativismo campesino, con el fin de ayudar a construir un futuro mejor para el campesinado, dinamizando los sistemas de producción, ordenando la relación con los mercados y dando apoyo institucional para la articulación del movimiento cooperativo.¹

En México, la crisis agrícola de los años setenta, la pérdida de legitimidad de los organismos oficiales y las políticas y el discurso populista del Presidente Echeverría (1970-1976), fueron la base del incremento de la movilización campesina y el populismo abrió un espacio político para nuevos esfuerzos de organización, educación popular y defensa de identidades culturales y multiétnicas. Las tomas y ocupaciones de tierras se multiplicaron a lo largo del país y la prensa informó de unas 600 invasiones en tres estados en 1973. Los pequeños propietarios también se movilizaron por asuntos relacionados con la producción, como en el caso de los productores de azúcar, tratando de redefinir sus relaciones con la industria y el Estado; pero lo que marcó este período fueron las reivindicaciones por la tierra. Uno de los hechos más importantes fue el surgimiento de frentes regionales que unieron a estudiantes, trabajadores y campesinos en los estados de Oaxaca, Durango, Zacatecas, Puebla y Chihuahua. El Presidente López Portillo (1976-1982), tratando de restaurar la confianza de la burguesía rural, revirtió muchas de las políticas de Echeverría y actuó en contra del movimiento campesino independiente. Este se defendió, organizándose a nivel nacional, siendo que antes había operado primordialmente a nivel local y regional. A principio de los años ochenta la Coordinadora Nacional del Plan Aya-la (CNPA) agrupaba 21 organizaciones de distintos estados; sus miembros eran básicamente campesinos pobres, campesinos sin tierra y jornaleros. Catorce de estas organizaciones tenían una base indígena. Las peticiones de los indígenas suelen diferir de las de los demás campesinos, porque piden derechos de tierras comunales basados en títulos coloniales y porque sus comunidades tienden a ser más unificadas. Hoy, en general, no reclaman derechos sobre un territorio específico, sino el derecho de tener suficientes tierras

para su sobrevivencia como individuos y grupos. Su lucha por la tierra no debe separarse de su lucha por la preservación de su idioma y cultura. La CNPA se ha distanciado de la tradición corporativista y clientelista a través de la combinación de movilización y negociación (lo último con una participación amplia de las bases), la autonomía política de las organizaciones miembros de la CNPA (pueden pertenecer o no a cualquier partido político) y el liderazgo elegido y rotatorio. Otras organizaciones, como las de los profesores y de los pobres urbanos, han emulado las modalidades organizativas de la CNPA. Desde principios de los años ochenta, son las organizaciones de productores las que han mostrado la mayor capacidad de movilización y negociación. Las organizaciones aisladas se han unido en redes regionales y nacionales, de las cuales la más importante es la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), creada en 1985. Los dos objetivos primordiales de la UNORCA han sido: mayores precios de sustentación para sus productos (aumentando por lo menos a la par con la inflación) y participación campesina en la elaboración de las políticas agrícolas. La UNORCA ha evitado enfrentamientos directos con las autoridades y, por lo tanto, no ha participado en las actividades de organizaciones como la CNPA (Paré, 1990, pp. 83-87).

También en Brasil existe un fuerte movimiento de sindicalización que se desarrolla simultáneamente con la transición política y que tiene su expresión rural, por ejemplo, en Santarém, donde los campesinos conquistaron el control del sindicato local, y en Acre, representado por los recolectores de caucho. En Xapurí, los recolectores de caucho se aliaron con los indígenas de la Amazonia y organizaron "empates" (un tipo de resistencia organizada en contra de la destrucción de los bosques naturales) gracias a los cuales se preservaron 1.2 millones de hectáreas de bosques. Si bien todos estos movimientos se basaron sobre todo en el dinamismo de la población rural, hay que reconocer también el papel muy importante desempeñado por aliados externos como la Iglesia, los medios de comunicación y los sectores políticos de izquierda. Estos aliados pueden ofrecer a menudo ayuda valiosa en materia de conocimiento político y difusión de información por sus redes, lo que puede inhibir reacciones violentas y fomentar la solidaridad, incluso a nivel internacional. De los movimientos de resistencia en contra de los desarraigos masivos, son las protestas en contra de los proyectos de represas los que han tenido el mayor

¹ Discurso inaugural de la Comisión Asesora Consultiva por su presidente, Francisco León Tovar, el 12 de junio de 1992, en Santiago de Chile.

impacto político y la mayor base participativa, abarcando a miles de familias y trabajadores rurales. En general, cada movimiento involucra a regiones rurales enteras, lo que complica la movilización y la organización. Además, como las represas afectan a grupos muy diversos, los movimientos tienen que forjar nuevas alianzas y encontrar intereses comunes. Generalmente, los grupos se organizan localmente por comunidad, aldea o pueblo, y eligen sus representantes para formar comisiones regionales (Grzybowski, 1990, pp. 29-32)

La heterogeneidad de los actores en el área rural y la dificultad que tienen las organizaciones e instituciones para responder a sus requerimientos se ilustra con el ejemplo de Nicaragua, así como con varios otros ejemplos a lo largo de este artículo. La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), creada en 1978, rápidamente se volvió la organización más importante de los campesinos y trabajadores agrícolas de Nicaragua. Sin embargo, la ATC tendía a representar mejor a los trabajadores asalariados que al resto, con sus pedidos de aumentos de salario y mejora de las condiciones de trabajo, de modo que los campesinos, que querían acceso a tierras y recursos productivos, se distanciaron paulatinamente de ella. La comarca se desarrolló como el nuevo centro de poder, organizando la vida rural, distribuyendo recursos, retomando las funciones jurídicas y coordinando tomas de tierras. Es sólo con la amenaza a la existencia de la vida civil rural provocada por el avance de la guerra de los contras, que los campesinos y trabajadores

rurales vieron como posible y deseable una alianza de intereses con los campesinos más ricos y los pequeños capitalistas agrícolas. En 1980, el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) juntó a los campesinos, pequeños y medianos agricultores y ganaderos para discutir el problema de la organización política en el área rural y la solución de las exigencias socioeconómicas de la población rural. El resultado fue la formación, en 1981, de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), sindicato de productores rurales ligado orgánicamente con el FSLN y cuyo objetivo era el fortalecimiento de la democratización de la sociedad civil rural. A pesar de la UNAG, el Estado y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria continuaron haciendo hincapié en las empresas estatales, las estrategias de colectivización, el control de la comercialización y la obligación de pertenecer a cooperativas para tener acceso a la tierra y a los medios de producción. Fueron los militares (muchos de los cuales eran de origen campesino o conocían el campo bien gracias a los años como guerrilleros) y los jóvenes militares desmovilizados que regresaban a sus comarcas, los que se dieron cuenta de que los pobres rurales no habían progresado mucho y de que los contras estaban reclutando grupos importantes de campesinos disconformes con la Revolución. Fueron ellos, entonces, los que presionaron por una política agraria más en línea con los requerimientos de los campesinos y por el restablecimiento de los Comités de Comarcas y de los Consejos Comunales (Ortega, 1990, pp. 128-133).

III

El concepto de identidad

Cuando una persona tiene una cierta percepción de su identidad y los demás le dan señales de que no concuerdan con esta percepción, tratará de ajustar su comportamiento para que los demás reaccionen como ella lo espera, en concordancia con su autoimagen. Si después de varios ajustes sigue sin recibir las señales esperadas, la situación le produce gran tensión. Así, por ejemplo, personas que se identifican como dominantes se comportan de manera aún más dominante cuando reciben señales de que son vistos por los demás como sumisos y, por el contrario, personas que tienen de sí mismas la imagen de ser sumisas reaccionan de manera aún más sumi-

sa cuando reciben señales de que los demás las ven como dominantes.

La tensión que genera la discrepancia entre la autoimagen y la imagen que perciben los demás surge incluso cuando las señales que se reciben de los demás indican una imagen más positiva que la propia autoimagen, y los esfuerzos de compatibilizar una y otra irán más en la dirección de asemejarse a la autoimagen. De allí que personas que esperan fracasar muestran desconcierto cuando son exitosas y hasta pueden sufrir problemas de salud por la gran tensión que eso les causa. Obviamente, mientras más importancia la persona dé a una característica específica de

su identidad, más fuerte será su reacción si ésta no es reflejada "correctamente" en la percepción de los demás.

Los cambios en el entorno provocan ajustes —a veces muy importantes— en el papel que desempeña una persona y en la manera como lo hace, lo que implica también un ajuste de la autoimagen. Las respuestas y señales de un entorno diferente pueden ser muy distintas de las esperadas y, por lo tanto, causar todo un proceso de ajuste de la identidad, y de desconciertos y tensiones (Burke, 1991, pp. 836-849).

Las investigaciones sobre las estrategias de sobrevivencia de las familias de los sectores populares —ante la crisis económica de los ochenta— muestran que hubo continuidad y recuperación de comportamientos "tradicionales" supuestamente superados en el tránsito a la modernidad (estructuras de hogares distintas del modelo nuclear, composición cambiante de los hogares por la necesidad de responder a los problemas temporarios o permanentes de otros familiares o no familiares y el mantenimiento de actividades productivas dirigidas al autoconsumo), combinadas con la generación de ingresos mediante la participación en el mercado de trabajo. Simultáneamente con estas transformaciones económico-sociales hubo cambios no cuantificables en la dinámica interna de la vida familiar, en la asignación de roles a los diferentes miembros de la familia —bien porque algunos no pueden desempeñar adecuadamente los prescritos, bien porque en el marco de un modelo de cambio social sin dirección cierta fueron otros, y otras, quienes se hicieron cargo de las funciones que abandonaron las instituciones y los mecanismos sociales encargados de su cumplimiento. Esto se complementó con la aparición de nuevos actores sociales —organismos no gubernamentales (ONG), activistas profesionalizados, agentes estatales— que han tenido como tarea generar "desde abajo", mediante acciones colectivas y en el marco de la restricción presupuestaria del Estado, las condiciones que hagan posible la sobrevivencia.

En todos los ejemplos que siguen, con independencia de la situación descrita y la respuesta de los habitantes rurales, subyacen cambios muy profundos. Conviene sopesar tales cambios y las tensiones que los han acompañado. Las migraciones, los cambios de trabajo y las razones que llevan a ellos configuran algunas de estas situaciones altamente perturbadoras.

En Chile, el resultado de las políticas aplicadas después de 1973 fue la expulsión masiva de campesinos

de sus antiguos lugares de residencia. Varios miles de familias campesinas fueron expulsadas de tierras anteriormente redistribuidas por la reforma agraria; muchos campesinos que recibieron parcelas no estuvieron en condiciones de mantenerlas por falta de una política de apoyo y se vieron obligados a venderlas o abandonarlas; la mayor parte de los trabajadores permanentes que antes residían en el interior de las haciendas se vieron excluidos a causa de la nueva agricultura capitalista; la política económica de concentración del crédito y apertura del mercado chileno (hasta 1985) a las importaciones de alimentos del exterior produjo la ruina de numerosos productores de alimentos y, por último, la compra de tierras por grupos financieros hizo salir a los campesinos que vivían en ellas. Todos estos cambios dieron lugar a una considerable disminución del empleo permanente en el campo, particularmente en las regiones de producción frutícola y forestal, y a la aparición de un empleo temporal muy importante, con fuerte demanda de mano de obra durante algunos meses y poca durante el resto del año. Los campesinos expulsados de sus antiguos lugares de residencia se instalaron en pequeñas aglomeraciones, la mayor parte de las cuales no existían antes, llamadas poblaciones, poblados, aldeas o villorrios. Estas aglomeraciones se encontraban en tierras públicas nacionales, a veces incluso en antiguas estaciones de ferrocarril abandonadas, en torno a antiguas aldeas o en los alrededores de las ciudades. Se calcula que hacia 1980 vivían en esos poblados rurales entre 200 mil y 250 mil familias (es decir, cerca de un millón de personas, cifra equivalente al 10% de la población rural total). De encuestas realizadas en diferentes regiones a principio de los años ochenta se desprende que en esa época el 55% de los pobladores rurales trabajaba en la agricultura, el 25% en la ciudad y el 20% en programas de empleo mínimo. Sólo el 10% tenía empleos permanentes, los hombres de mediana edad en la agricultura, y los demás hombres y las mujeres en la ciudad como obreros o empleadas domésticas, respectivamente. La crisis del empleo urbano hizo también que numerosos trabajadores urbanos se dedicasen a actividades agrícolas temporales (Chonchol, 1990, p. 153).

En Colombia, en las zonas cafetaleras, existe una creciente especialización en los distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, la aplicación de fertilizantes, el arreglo de las bolsas con plántulas, la preparación de la tierra y el trasplante de árboles jóvenes son efectuados por trabajadores especialmente contratados para estas tareas. Al mismo tiempo, se observa

una migración del campo a la ciudad. Una encuesta de hogares efectuada en 1988 en los barrios marginales de las ciudades de Manizales y Chinchiná (ambos del departamento de Caldas), muestra que un alto porcentaje de los trabajadores (41.5%) se desempeñaba en el sector agrícola. En las entrevistas conducidas posteriormente resaltó que ninguno de los entrevistados deseaba realmente trabajar en este sector, pero que debido a la falta de calificaciones, la falta de documentos para su inserción en el mercado de trabajo formal y a la falta de otras oportunidades de trabajo, o como trabajo complementario, el sector cafetalero les daba una alternativa fácil. Todos los entrevistados opinaron que su nivel de vida había mejorado desde su migración a la ciudad (Hataya, 1992, pp. 63-83).

En México, la mayoría de las familias campesinas e indígenas contaba con tierras, ya fuesen ejidales, comunales o en pequeña propiedad. La familia se organizaba alrededor del hombre viejo, el jerarca, que representaba una autoridad moral frente a su mujer, sus hijos solteros y casados, sus nueras y sus nietos. Todos ellos formaban un grupo doméstico de producción y consumo. Cuando moría el patriarca, se creaban nuevos núcleos familiares autónomos y la viuda y los hijos menores quedaban bajo la responsabilidad de algunos de los hijos mayores. Sin embargo, últimamente la carencia de tierras o de recursos está generando nuevos mecanismos de sobrevivencia que transforman el grupo familiar y la comunidad, obligando a la fuerza de trabajo rural a abandonar el lugar de origen. No se rompen necesariamente los lazos económicos y sociales vigentes entre las unidades familiares, pero éstos se dificultan y surgen problemas de toda índole. En el caso de los trabajadores temporales, los salarios bajos obligan generalmente a la participación de toda la familia para poder subsistir, lo que causa inasistencia de los niños a la escuela, participación de la mujer en la fuerza de trabajo mientras sigue siendo responsable de todas las tareas caseras, inestabilidad emocional, aumento del alcoholismo y otros problemas. Debido a su constante movilidad y aislamiento, estos trabajadores tienen pocas posibilidades de organizarse. Se estima que el número de trabajadores temporales en México asciende a 4.5 millones.

Las otras formas de migración tienen impactos distintos según el caso. En algunos, la mujer asume la jefatura del hogar durante la ausencia del hombre, y los demás miembros de la familia se distribuyen las tareas del que se va; éste regresa para las fiestas

del pueblo, las ceremonias rituales y las crisis familiares. Tal esquema es viable en el caso de familias extensas, pero no funciona para familias nucleares sin relaciones con parientes o sin lazos de compadrazgo. En el caso de la migración permanente, esta se hace generalmente a nivel de la familia nuclear. Las condiciones de vida de los mexicanos que emigran a Estados Unidos, aunque están lejos de ser buenas y exponen a los inmigrantes ilegales a la continua amenaza de deportación, son mejores que las de los trabajadores temporales en México. Sin embargo, les causan inestabilidad emocional por la discriminación de la cual son objeto, por su continuo deseo de regresar a su familia y comunidad y por aferrarse a sus valores culturales, aun si viven una acelerada aculturación que modifica su lenguaje, forma de vestir, comportamiento y vida familiar tradicional (Muriedas, 1988, pp. 72-74).

Otra forma de desestabilización fuerte fue la causada por la dramática evolución de la pobreza en Venezuela en los años ochenta. Si consideramos como hogares en extrema pobreza aquellos que no pueden acceder a una canasta alimentaria básica, y como hogares pobres a aquellos que no pueden acceder a la canasta de consumo nacional, que además de alimentos incluye otros productos básicos, entre 1983 y 1989 el número de hogares rurales en situación de extrema pobreza aumentó de 44 000 a 257 000 y el de hogares pobres de 408 000 a 435 000 (Venezuela, Ministerio de la Familia, 1992, pp. 17 y 20). El paso del estado de no pobreza al estado de pobreza o de extrema pobreza provoca en los integrantes de los hogares afectados, además de las preocupaciones relativas a su sobrevivencia física, una enorme crisis de su autoimagen, con las tensiones y reacciones consiguientes.

En cuanto a los cambios en el seno de la familia, ya nos referimos antes a lo sucedido en México. A continuación mostraremos dos situaciones muy distintas, con efectos opuestos en la cohesión de la familia.

En Cuba, tanto en el área urbana como en el área rural, la madre aparece como quien ejerce la autoridad real y la formadora de hábitos en los niños, mientras que los padres mantienen una actitud pasiva ante los problemas del hogar. La jefatura femenina en los hogares ha aumentado de 9.6% registrado en el censo de 1953 a 19.7% en el censo de 1981. Este aumento debe ser mayor si se tiene en cuenta que, por las limitaciones de vivienda, la mujer divorciada o separada permanece en el hogar de los progenitores, donde la jefatura formal en general es masculina.

Entre las mujeres casadas de las zonas rurales, aunque en menor medida que en las zonas urbanas, ha habido una mayor inserción en la vida activa. Medida en años brutos de vida activa, ésta se elevó de 3.6 a 10.5 años. Los cambios en la participación laboral de la mujer le permiten aportar ingresos a la organización familiar, lo que tiende a repercutir, de alguna manera, en los roles que cada uno de los miembros de la familia debe asumir. Una mayor independencia de los hijos ha llevado a cambios en las funciones de la familia. Entre los factores que han ido posibilitando esta independencia están las becas y las campañas protagonizadas por la juventud, como las de alfabetización, maestros voluntarios, recogida de café e Isla de la Juventud. Otro factor es la participación de los jóvenes en sus organizaciones políticas y de masas, en las cuales toman decisiones con independencia de sus relaciones con la familia. Sin embargo, la familia no está plenamente preparada para actuar en correspondencia con esa independencia y, si bien cumple un papel importante en la transmisión de nuevos valores, también es cierto que transmite y reproduce viejos valores que la ideología y las leyes (por ejemplo, respecto a la igualdad de la mujer) han tratado de cambiar (Pérez Rojas y Díaz González, 1988, pp. 162-163).

En El Salvador, en medio del agudo conflicto social y de la experiencia traumática de la guerra, la estructura familiar estaría sufriendo transformaciones. Uno de los aspectos más relevantes es el desplazamiento del concepto individualista de familia, en donde el peso recae en la reproducción de la familia nuclear, hacia una concepción más amplia y social de la familia. Así, las familias procedentes de zonas conflictivas tienden a ampliar su concepción familiar, acogiendo en su seno a parientes cercanos ó lejanos. La cohesión interna de estos grupos familiares permite un alto grado de funcionalidad y solidaridad. Los que han quedado vivos valoran altamente la relación de familiaridad, al identificarse y compartir sus penurias y sus dificultades. Entre las familias procedentes de zonas conflictivas y residentes en El Salvador, en la mayoría de los casos la búsqueda de satisfacciones se concentra en el seno familiar. El sistema familiar tiende a extender sus vínculos para protegerse del medio y los miembros tienden a salir todos juntos, o al menos en grupos, para mayor seguridad (Rodríguez, 1988, p. 141-142).

Los cambios en la sociedad no sólo han afectado a la familia sino también a las comunidades. Así, las reformas económicas y políticas impuestas en nom-

bre de la modernización y de la democracia sobre las comunidades indígenas de Bolivia (*ayllus*) han promovido un concepto de ciudadanía que de hecho ha desplazado y socavado la organización social y la práctica política indígenas. La expansión de los latifundios en el siglo XIX y las transformaciones de los comuneros de los *ayllus* en colonos fue un primer elemento de crisis para muchas comunidades indígenas. La revolución nacional de 1952 y la reforma agraria que la siguió generó también una crisis organizativa, ideológica y de identidad de las comunidades indígenas. Asimismo, en los años ochenta, los partidos progresistas y las organizaciones no gubernamentales continuaron con el desmantelamiento y la marginalización de las formas de organización particulares del *ayllu* (Rivera Cusi-canqui, 1990, pp. 97-99).

Como ya se vio y veremos todavía a continuación –y contrariamente al concepto que se tiene a menudo del área rural tradicional– hay en ella gran flexibilidad y capacidad de adaptación y de respuesta positiva. Así, según León Zamosc, si bien los campesinos en Colombia pueden haber mostrado tendencias retrógradas después del impacto inicial del capitalismo en el campo, es necesario ahora revisar esta noción, ya que, a medida que el capitalismo se arraiga y se expande, las aspiraciones de los campesinos parecen evolucionar en dos direcciones complementarias: la primera hacia la defensa y la promoción de una libre economía campesina y la segunda hacia el logro de las libertades políticas prometidas por ser ciudadano de una nueva sociedad (Zamosc, 1990, p. 46).

La mayoría de los beneficiarios de la reforma agraria en la costa del Perú habían sido obreros agrícolas con tareas definidas y nunca habían tenido que tomar decisiones en cuanto a tipo de cultivos y control del ciclo agrícola, ni mantenido una contabilidad ni siquiera simple de la explotación. Además, estaban acostumbrados a la maquinaria y prácticas agrícolas para grandes extensiones. Hoy, estos nuevos productores, combinando agricultura con ganadería y utilizando animales de tracción y excretas animales como fertilizante, redescubrieron espontáneamente una agricultura campesina que marcó a Europa en el pasado, pero que es una novedad si se compara con los usos en la gran empresa agrícola y también con las prácticas de la agricultura andina (Bourliand, Dollfus y Mesclier, 1991, pp.30-31). En general, los estudios económicos, sociológicos y antropológicos indican que hay gran dinamismo y movilidad en el mundo rural

peruano: la familia ampliada es pluriactiva, hay intercambios migratorios importantes, la economía monetaria está presente en todo el territorio, la importancia dada a la educación es muy grande y la incorporación

de nuevas tecnologías –aunque a una escala pequeña, con pocos medios y en condiciones socioeconómicas desfavorables– es más la norma que la excepción (Revesz, 1991, pp.17-18).

IV

Las normas sociales y los costos de la no conformidad

El control que ejercen las normas institucionales sobre la conducta individual basada en motivos morales siempre es imperfecto, puesto que tiene mayor influencia sobre algunos individuos que sobre otros y siempre existen tendencias más o menos fuertes a la divergencia de actitudes valóricas respecto al sistema común. Por lo tanto, siempre hay espacio para un tipo secundario de control que se apoya en los intereses (positivos o negativos) del individuo o del grupo que, por motivos sólo morales, desviaría su conducta de las normas institucionales establecidas.

Las ventajas personales de apartarse de las normas establecidas pueden ser superadas por costos que no son inherentes al acto de disconformidad, pero que surgen de la respuesta de la comunidad y se traducen en diversos tipos de sanciones que van desde la desaprobación hasta el castigo abierto y que, en consecuencia, restringen los actos de no conformidad.

A medida que se debilitan los motivos morales para acatar las normas establecidas, se tiende a reforzar los controles secundarios. Obviamente, existe un límite hasta el cual este proceso puede seguir antes de que todo el sistema se desmorone, ya que la fuerza de las sanciones y la voluntad de aplicarlas es en gran medida –aunque no exclusivamente– una expresión de actitudes morales. Además, la aplicación de las sanciones requiere de un cuerpo social y es cuestionable que el proceso pueda basarse sólo en sanciones. Esclarecer la importancia relativa de estos motivos primarios y secundarios hacia la conformidad es esencial para determinar el grado de estabilidad de los sistemas institucionales y sus normas sociales.

Desde el punto de vista institucional, una sociedad perfectamente integrada es la que responde al doble criterio de tener un sistema completamente armonioso de normas, y de tener autoridad y motivos morales para cumplirlas (Parsons, 1990, pp. 319-345).

La utilización por parte de un grupo de su capacidad interna de control para reforzar u oponer un control externo al grupo dependerá de los costos de acatar la imposición externa, de los costos del control dentro del grupo, de la fuerza de las sanciones externas y de la capacidad de seguimiento del agente externo (Heckathorn, 1990, p. 382).

A fines del siglo XX sigue siendo claro que las relaciones sociales basadas en la familia, el idioma, la religión, la raza y las costumbres constituyen una fuerza poderosa en las conformaciones políticas y económicas en todas las regiones del mundo. En vez de desaparecer frente a la industrialización, la educación, las mejores comunicaciones y las burocracias, o de perder vigencia frente a la formación de clases, estas ataduras primordiales se hacen presentes día a día. Sin embargo, para ser activadas y utilizadas ellas exigen mantenimiento e inversiones, a través de transacciones sociales, ceremonias y rituales periódicos. Así, se puede observar que ante problemas de recesión, deterioro de la relación de intercambio, sequía, guerra u otros, los productores agrícolas diversifican sus opciones económicas y reducen los riesgos a través de un incremento de todo tipo de inversiones en estas relaciones sociales que les podrían dar acceso a recursos. En mejores circunstancias, relaciones institucionales “tradicionales” modificadas han facilitado ahorros, formación de capital, inversiones, gerencia y una variedad de actividades empresariales, al proporcionar un marco de comunicación y confianza en países donde esto no está asegurado a través de la cultura común o de las instituciones nacionales (Hoben y Hefner, 1991).²

Hay algunos ejemplos que muestran que activi-

² Los autores se refieren al África en su artículo, pero el argumento también es válido para América Latina y el Caribe.

dades nuevas utilizan formas tradicionales de organización deliberadamente como en Bolivia, por obligación como en Nicaragua, o espontáneamente como en Perú. En los años setenta surgieron varios movimientos campesinos de oposición de los cuales el sindicato katarista del altiplano aymara era el más importante. La combinación de las identidades de clase y de etnia unió a vastos sectores del campesinado indígena boliviano y desafió las bases ideológicas del Estado post-1952. Este proceso culminó con la creación en 1977 de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Los kataristas creían que las estructuras de las uniones sindicales podían articularse con las tradiciones organizacionales de los *ayllus*. De hecho, los sindicatos aymaras del altiplano lograron combinar la democracia directa de los *ayllus* con la democracia representativa del sindicato, formando así una poderosa federación capaz de actuar en unidad, respetando al mismo tiempo una diversidad organizacional y cultural (Rivera Cusicanqui, 1990, pp. 107-108).

Contrariamente a lo que pasó en las áreas urbanas de Nicaragua, donde el nuevo aparato del Estado pudo establecer un control institucional en la sociedad civil con relativa facilidad, en las áreas rurales de ese país fue casi imposible para el Estado establecerse sin encauzar con las instituciones rurales tradicionales. En consecuencia, los nuevos órganos de poder rural empezaron a ser formados por campesinos y trabajadores rurales, basados en las estructuras de poder tradicionales de la sociedad civil rural. La fuerza comunal de la sociedad civil rural y de los estilos de vida campesina se ha reflejado en la manera como la vida de la comarca se ha adaptado al conflicto militar. Los campesinos han tendido a reaccionar frente al conflicto como comunidad, aliándose como grupo con la contra, o con la revolución y el régimen sandinista. Esta cohesión social también se pudo observar en la manera cómo comunidades que han sido reubicadas debido al conflicto, han logrado restablecer sus espacios sociales y tradiciones en su comarca original o en un nuevo lugar, sin involucramiento externo. Las concepciones urbanas de organización social son incapaces de explicar la fuerza de estos lazos familiares y comunales, ni tampoco la forma en que estas experiencias crean un marco para la consolidación de la sociedad civil rural. La legislación electoral de 1989 y las mediaciones diarias entre la población y el gobierno dan prioridad a formas indirectas de representación. En respuesta, las organizaciones campesinas han empezado a crear la-

zos entre varias comarcas, tratando de moldear un modelo democrático en el cual los campesinos mantienen el control de la estructura de poder en sus territorios. El tipo de organización que está emergiendo de este proceso todavía no se ha consolidado (Ortega, 1990, pp. 122-123, 128 y 137).

En Perú, a raíz de la reforma agraria, sólo aproximadamente un 10% de la población campesina de la región serrana sigue vinculada hoy en día a las haciendas, mediante relaciones precapitalistas. La gran mayoría vive con una economía reducida y cada vez más integrada al mercado. Sin embargo, las familias siguen intercambiando el trabajo sobre la base de viejas tradiciones andinas.

En los casos de Bolivia y Paraguay se nota el socavamiento de las estructuras tradicionales y el empuje de los jóvenes para buscar un entorno económico mejor y también una vía de escape a la presión social. En los años de crisis del decenio de 1980, la ayuda alimentaria y las donaciones de recursos productivos fueron utilizadas deliberadamente por varias organizaciones progresistas como una manera de promover la formación de sindicatos en los *ayllus*, explícitamente marginando su sistema comunal para la distribución de recursos y sus normas de control social. La desesperación y la hambruna en las comunidades permitieron que este tipo de chantaje funcionara y la retórica revolucionaria servía para legitimarlo. Se argumentó que el sindicato era más moderno, democrático y revolucionario que el sistema de autoridades étnicas remanente de tiempos precapitalistas. El ligar la ayuda alimentaria a la formación de sindicatos ha acrecentado la mentalidad de dependencia, lo que a su vez ha disminuido la capacidad de autogobernarse. Los *ayllus* ven a las ONGs como fuentes de recursos paralelas al Estado y a las cuales tienen que hacer concesiones, como, por ejemplo, aceptar votar por un candidato específico en el sindicato o en las elecciones municipales o nacionales. También han crecido las tensiones entre las generaciones, y los jóvenes ven a las ONGs como una vía para escapar del control social colectivo y buscar alternativas de subsistencia individual, como la migración, lo cual tiene un efecto adverso en el potencial productivo de las comunidades. La crisis organizacional e ideológica ha sacudido la estructura mental colectiva de tal modo que se observa una pérdida de confianza y autoestima, sobre todo en las generaciones más jóvenes, incluso hasta internalizar una visión denigrante de su propia cultura y costumbres ancestrales. Los indígenas se ven presionados a abandonar su cuadro de referencia moral y

sicosocial a fin de lograr un mínimo respeto y tratamiento como "igual". Todos estos factores han debilitado el sistema comunal de tenencia de tierras, rotación de cultivos y formas de autoridad y representación, sin fomentar formas alternativas de organización. Sin embargo, los *ayllus* han desarrollado varias formas de resistencia, desde la aceptación selectiva y condicional de los sindicatos hasta actitudes abiertamente hostiles y desafiantes (Rivera Cusicanqui, 1990, pp. 111-113).

La migración del campo a la ciudad y al exterior constituye siempre una vía de escape de las

familias campesinas, cuando su estabilidad económica se deteriora. En Paraguay este fenómeno es una constante³ y se profundiza en períodos de crisis, como en 1992 a causa de la baja rentabilidad del algodón. Informes provenientes de los departamentos de Misiones y Ñeembucú dan cuenta de miles de campesinos que emigran hacia Buenos Aires, dando como causa la falta de tierras, las malas cosechas, los bajos precios pagados por la producción y la desocupación. Más del 80% de los emigrantes serían jóvenes menores de 25 años (*Informativo Campesino*, 1992).

V

Las relaciones de poder

El poder es una resultante de la cantidad y distribución de los intercambios de comportamientos a lo largo de una interacción extendida. El intercambio puede ser provechoso o punitivo, puede tener una alta o baja frecuencia y puede ser distribuido de manera simétrica o asimétrica entre los participantes en la relación. Al igual que las estrategias de poder, las resultantes del poder son medidas de comportamiento. Son estas resultantes las que los actores sociales tratan de modificar a su favor.

Las consecuencias del comportamiento de una persona o grupo sobre otro puede dar como resultado cosas tangibles como dinero, retribuciones sociales como *status* o aprobación, o estados psicológicos como felicidad y autoestima. Los actores sociales son mutuamente dependientes ya que se proporcionan beneficios. La dependencia de un actor respecto de otro varía directamente con el valor del beneficio que le puede dar el otro, e inversamente con la posibilidad de obtener beneficios de otras fuentes, que a su vez tienen relaciones de poder en su intercambio.

El castigo tiene una alta probabilidad de provocar la respuesta del otro, sea por una acción recíproca de castigo, sea por la retención de la recompensa que es valorada por el otro.

Independientemente de la conciencia de las relaciones de poder que tiene un actor social o de sus intentos de influir en ellas, una relación desigual de poder llevará al actor más poderoso a disminuir el intercambio, porque tiene opciones más valiosas. Tales opciones dan un incentivo estructural para retener

las recompensas destinadas al actor más débil (Molm, 1990, pp. 427-447).

La economía moral se concentra en el sistema de derechos y obligaciones que rodean las relaciones interpersonales e intraclase en sociedades rurales, y examina los patrones de la normatividad compartida de lo que constituye un comportamiento apropiado. La totalidad de los derechos y obligaciones de los grupos dominantes y de los subordinados crea una compleja tradición de reciprocidad desigual, una estructura de un universo moral compartido y una noción común de lo que es justo. En tiempos de cambio estructural, la percepción de la reciprocidad que era considerada como justa es alterada, y puede desencadenar una reacción colectiva violenta que lleve, por ejemplo, a tomas de tierras (Flórez Malagón, 1990, pp. 133-150).

Las investigaciones sobre sindicatos y cooperativas muestran que aun dirigentes que no son muy democráticos pueden encontrarse bajo presiones que los conducen a entregar beneficios a los miembros de su organización. Los valores y reglas de la democracia, por lo tanto, no son la única motivación para ejercer un liderazgo responsable. Cabe considerar que el Estado y las organizaciones formales y sociales en conjunto configuran oportunidades, riesgos y beneficios para que los dirigentes puedan desentenderse de los intereses de los miembros, de un lado, y para que

³ De hecho, ya en 1915 Eligio Ayala hablaba de estas migraciones en su libro *Las migraciones paraguayas*.

los miembros responsabilicen a sus dirigentes, del otro. A menudo los movimientos de base pasan por cambios que los acercan o alejan de las estructuras democráticas, atribuyéndose distintos grados de responsabilidad a sus dirigentes a lo largo de su historia.

Dentro de las comunidades, los medios informales de consulta, de sanción y de toma de decisiones pueden ayudar a compensar las debilidades de los canales formales de participación, como la poca asistencia a reuniones, los sesgos étnicos y de género, la intervención gubernamental basada en clientelismos y las intervenciones en los resultados de las elecciones. Asimismo, rara vez las organizaciones campesinas toman grandes decisiones en reuniones masivas o a través de la votación. Generalmente estos procedimientos formales solamente ratifican decisiones tomadas con anterioridad a través de sutiles debates informales y de presiones. Sin embargo, los grupos que unen muchas comunidades son demasiado grandes para ser conducidos por democracia directa, y los mecanismos informales de responsabilización de los dirigentes son demasiado débiles. Por esto, los canales horizontales entre comunidades son especialmente importantes para impedir la dominación del liderazgo central. En comunidades alejadas estos eslabones horizontales rara vez se desarrollan en forma espontánea, de modo que es necesario hacer esfuerzos deliberados de organización para mantenerlos. En la memoria política popular probablemente se ponga el acento tanto en la importancia de las alianzas tácticas como en la acción colectiva horizontal en defensa de los intereses de clase.

Las organizaciones regionales son esenciales para la democratización del proceso de desarrollo rural. En gran parte de América Latina, el principal obstáculo al desarrollo rural es el poder atrincherado de la elite regional tanto pública como privada, generalmente aliadas entre sí. A menudo esa elite monopoliza los mercados más importantes, impidiendo que los campesinos retengan e inviertan el fruto de su trabajo. Las organizaciones regionales son con frecuencia los únicos actores capaces de abrir estos mercados y de imponer políticas de desarrollo más equitativas y responsables. Y también son cruciales para defender la libertad de asamblea y para crear un entorno favorable para una mayor organización comunitaria (Fox, 1992, pp. 3, 7-8, 10 y 27).

La exclusión política de movimientos rurales de oposición a través de sistemas electorales desvirtuados, ha conducido a que los movimientos campesinos privilegien acciones directas de las masas y acciones

armadas como la ruta principal hacia el cambio. Donde la compra de votos, los fraudes y los rituales electorales fueron la norma durante décadas, y a medida que las alternativas parecen más viables, se observan poco a poco participaciones más activas y autónomas. Los pobres rurales pueden no estar en condición de ofrecer una opción política propia, pero su número es suficiente como para incentivar a los partidos políticos urbanos a favorecer medidas como la reforma agraria. Los terratenientes perciben correctamente que una competencia política verdadera, a nivel rural, podría hacer peligrar sistemas de tenencia de tierras altamente desiguales. De hecho, los sistemas pluralistas electorales combinados con estructuras sociales altamente polarizadas, como en Brasil y Colombia, han resultado en mucha violencia, mientras que la reforma agraria que conoció Bolivia le dio al sistema competitivo electoral una fundación social mucho menos polarizada (Fox, 1990, pp. 7-8).

La desarticulación de una economía disminuye de varias maneras el efecto esperado del crecimiento sobre el bienestar. Primero, la presencia de un gran número de trabajadores con bajos niveles salariales en sectores poco productivos hace que los sectores más productivos necesiten pagar sólo una pequeña diferencia adicional para atraer a los trabajadores más experimentados y de mayor productividad. Por lo tanto, se debilita la relación entre aumento de la productividad y aumento del salario real, y también entre crecimiento y bienestar. Segundo, se supone que gracias al crecimiento el sector público obtiene mayores recursos, que pueden ser utilizados para elevar el bienestar de la población. Sin embargo, hay varias razones por las cuales en una economía desarticulada es menos probable que los fondos públicos sean utilizados para este efecto: una de ellas es que la desarticulación disminuye el incentivo económico para que los políticos transfieran ingresos o legislen en este sentido. Tercero, una economía desarticulada mira hacia afuera tanto para los insumos como para los productos de sus sectores más desarrollados y, por lo tanto, los salarios se tornan en un costo neto, puesto que sus trabajadores no son una fuente significativa de demanda. Además, el sector moderno en una sociedad subdesarrollada atrae la mayor parte del capital disponible, tanto nacional como extranjero, y la solícita atención de los agentes gubernamentales. Por esto, el sector agrícola que no está ligado a las actividades exportadoras se queda estancado e improductivo (Strokes y Anderson, 1990, pp.66-67).

El poder de la elite rural se refleja en los ejemplos de Brasil y de México, así como también, hasta cierto punto, en los de Colombia y de Ecuador. Los 10 estados más rurales de Brasil (con más de 50% de población rural) representan 20% del electorado nacional, pero eligen 25% de la Cámara Baja y 42% de la Cámara Alta en el Congreso Nacional. Sin embargo, debido a las reglas electorales vigentes, a la falta de libertad de asamblea y al peso acumulado de las relaciones de poder tradicionales, son los conservadores rurales los que monopolizan la representación política formal en las zonas rurales. Por esto, aun los políticos urbanos moderados a menudo se alían a ellos para perseguir sus propios objetivos. La elite rural utiliza esta influencia en el sistema político nacional para bloquear, no solamente la reforma agraria, sino también un amplio rango de cambios políticos y sociales. Existen instancias en que jueces, procuradores y policías están subordinados a los grandes terratenientes y el deseo político de combatir la violencia rural no siempre existe (Grzybowski, 1990, pp. 22-25 y 36).

El sistema de caciques sigue siendo un obstáculo mayor en la democratización rural de México porque, al depender ellos del partido gobernante —el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— tienen un papel primordial en el juego electoral, monopolizando los recursos, los créditos, los servicios y la comunicación y entorpeciendo así la competencia. Esta relación de clientelismo está todavía reforzada por relaciones de compadrazgo y familiares, y la distribución de bienes y servicios públicos se ve así condicionada por lealtades personales y políticas (Paré, 1990, p. 82).

La diversidad de los movimientos y de sus reivindicaciones demuestra que el campesinado colombiano (al igual que el brasileño, el nicaragüense y el de tantos otros países) no es un grupo homogéneo: los aparceros y trabajadores sin tierra quieren tener sus propias tierras; los pequeños propietarios quieren defender su posición en el mercado y los colonos quieren mejorar sus condiciones de producción. También los métodos son distintos, aunque comparten varias características que vale la pena mencionar. Primero, las movilizaciones han sido masivas, indicando que tienen el apoyo de las bases y capacidad de organización; segundo, los campesinos han actuado fuera de los canales oficiales y han recurrido a medidas no institucionales, sobre todo a actos de fuerza; y tercero, ellos han actuado con el propósito de forzar a las autoridades a establecer negociaciones

directas de alto nivel. Las dos últimas características apuntan a la falta de canales políticos apropiados entre la población rural y las instancias de gobierno. De hecho, existen dos sistemas distintos de interacción de la población con el gobierno y los partidos políticos: uno, moderno y orgánico, para los empresarios agrícolas, sea a través de sus gremios, sea a través de rotaciones de sus miembros en puestos de gobierno o del poder legislativo; otro, basado en el clientelismo, en el cual el acceso a los escasos servicios públicos y los otros favores personales se pagan con el voto. El clientelismo ha sido efectivo en desvirtuar las iniciativas de reforma desde arriba y las presiones hacia el cambio desde abajo (Zamosc, 1990, pp. 48 y 50-51). Como vimos en un acápite anterior, el gobierno de Barco tomó medidas para establecer canales más directos entre las esferas gubernamentales y los campesinos.

Aunque no existen estadísticas, es sabido que durante los años setenta los militares fueron de los pocos en Ecuador que adquirieron grandes extensiones de tierras (en las zonas más fértiles y productivas además). El movimiento indígena es, por lo tanto, una amenaza directa para ellos y desde julio de 1990 se observa una militarización de las zonas rurales de la Sierra, con controles continuos de identidad. En cada provincia se establece una lista de los ecuatorianos que han de ser arrestados y de los extranjeros que han de ser expulsados en caso de amenaza de un nuevo levantamiento. Estas van acompañadas por una campaña de (des)información sobre la infiltración del movimiento indígena por el comunismo internacional, grupos extremistas, dirigentes adiestrados política y militarmente en Cuba, sacerdotes y religiosos extranjeros adeptos de la teología de la liberación, etc., que ha sido acogida por parte de la prensa y de la opinión pública. Paralelamente, algunos terratenientes se sienten amenazados por la presión del movimiento indígena y venden sus tierras a precios bajos. Aunque limitadas, estas acciones impresionan a los demás terratenientes e inducen a los productores agropecuarios —acusando a las autoridades de ser incapaces de proteger sus bienes— a una paramilitarización del área rural y una intensificación de las prácticas de autodefensa ya en vigor desde hace mucho tiempo y que han causado un buen número de víctimas (Fassin, 1991, pp. 100-101).

También existen casos de gremios que han logrado utilizar un lenguaje adecuado y así vincularse con más fuerza que otros con su clientela, como en Brasil, y con las autoridades, como en México. La

Unión Democrática Rural (UDR) logró ir más allá de los grandes propietarios de Brasil y aglutina en contra de la reforma agraria a muchos pequeños productores, con mensajes sobre la defensa de la propiedad privada y también de la producción, el crédito, el mercado, los precios, etc.; su lenguaje moderno y técnico está en sintonía con las preocupaciones de un gran número de pequeños y medianos productores agrícolas en crisis. Este éxito de la UDR es una muestra de la debilidad del movimiento social —la Confederación de Trabajadores Agrícolas (CONTAG) y la Central Unica de Trabajadores (CUT)— que tiene dificultades para definir una estrategia unificadora para incorporar la modernización en su discurso y para acercarse a las preocupaciones de un gran número de pequeños propietarios (Gros, 1991, pp. 63-65).

En la mayoría de las organizaciones campesinas de América Latina se deja fuera a las mujeres, formal o informalmente, en especial cuando las leyes agrarias excluyen a las mujeres de los derechos de acceso a la tierra. En México, los ejidos específicamente excluyen a las mujeres de los derechos a la tierra, excepto para viudas y algunos casos de madres solteras. En la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas (UELCA), sin embargo, la mujeres de los ejidos lograron ser

representadas a nivel regional, por primera vez en México, a través de las Unidades Agroindustriales de Mujeres (UAIM). La UELCA empezó con su proyecto de viviendas rurales a través de préstamos gubernamentales. Para ser sujeto de crédito subsidiado, el gobierno obligó a la UELCA a llevar a cabo un estudio detallado de la situación económica de sus miembros. De allí resaltó la importancia del sector informal de la economía local, cuyos actores principales eran las mujeres. Conjuntamente con dos consultoras de la UELCA, las mujeres formularon proyectos, integrándose al esfuerzo de desarrollo económico regional. A pesar de la falta de cooperación recibida de la mayoría de los miembros de la UELCA, ellas lograron unir sus 15 grupos comunitarios en la red llamada UAIM. Cuando los dirigentes de la UELCA se dieron cuenta de que podían acceder a recursos económicos y reconocimiento político a través de la UAIM, le concedieron representación oficial en su asamblea. Y a medida que fue quedando más claro que para llevar adelante una política agraria procampesina era indispensable una mayor participación y democratización, los movimientos campesinos empezaron a focalizar su atención en las elecciones a nivel municipal (Fox, 1992, pp. 19-29).

VI

Conclusión

Las movilizaciones sociales necesitan legitimación y una masa crítica de participantes para tornarse masivas. Debido a la distancia entre los asentamientos rurales, a la dispersión de la población, así como a veces al aislamiento social de las comunidades y a las posibilidades de mayor represión impune, la movilización rural es más difícil de lograr y de organizar que la movilización urbana.

La apertura democrática en la mayoría de los países de la región ha dado un espacio y un mayor ímpetu a la formación de agrupaciones estructuradas en pro de alguna causa y, al mismo tiempo, a manifestaciones espontáneas y a veces violentas, como las tomas de tierras. Las acciones ilegales y la violencia se explican por la poca trascendencia dada en el pasado a los movimientos campesinos, lo que los lleva a utilizarlas para obligar a las autoridades a conceder lo que se les pide, en vez de entablar negociaciones a través de vías más formales.

Los cambios a los cuales ha sido sometida la población rural de la región en estas últimas décadas han sido particularmente marcados y rápidos. Entre otros, se pueden mencionar los procesos de reforma y contrarreforma agraria, las migraciones del campo a la ciudad, la penetración de los medios de comunicación, el aumento del trabajo remunerado y temporal, y la mayor participación de la mujer en actividades laborales remuneradas y fuera del hogar. Todo esto ha tenido sus efectos sobre la autoimagen de las personas involucradas, causando tensiones y tácticas de adaptación y de acomodamiento, haciéndolas a veces agarrarse con más fuerza a las tradiciones, y a veces soltarlas rápidamente. Así, aunque las relaciones primordiales siguen fuertes, no hay ninguna duda que están cambiando: los roles dentro de la familia (de la mujer, de los hijos y por lo tanto del hombre); las tradiciones; las relaciones con el mercado y los hábitos de consumo; las relaciones entre miembros y gru-

pos de la sociedad (compadrazgo, mingas, *ayllus*); las cohesiones de los grupos dentro de la sociedad y otros aspectos.

Debido a los grandes cambios que ha habido en el área rural, la conformidad voluntaria con las normas sociales ha tendido a bajar y los costos de la no conformidad también. Son sobre todo los jóvenes los que tratan de sustraerse a las normas, ya sea participando en actividades con normas distintas o, más drásticamente, a través de la migración.

Las tradicionales relaciones de poder entre los diversos grupos de la sociedad también se han modificado apreciablemente en las últimas décadas, en parte debido al impacto de las reformas agrarias y en parte por la evolución de la sociedad hacia modelos y valores distintos y una concepción más individualista e igualitaria. Algunos poderes, como el del terrateniente —que combinaba a menudo también una cierta autoridad jurídica y moral—, han desaparecido sin ser reemplazados por otra fuente de poder, o se han man-

tenido, pero con menor aprobación tácita del resto de la sociedad. El cambio y el incumplimiento de las exigencias y expectativas mutuas han desatado acciones a veces violentas, como las tomas de tierras.

En general, se puede concluir que en la segunda mitad de este siglo se han producido cambios profundos en la sociedad rural, que han conducido a una mayor integración social en algunos ámbitos. Se observa una mayor fuerza de los movimientos organizados (gremios, sindicatos, movimientos políticos), los que trascienden la comunidad, se rigen por estructuras jerárquicas formalizadas y eligen sus miembros por la vía de la democracia indirecta. En otros ámbitos, los cambios han llevado a una desintegración social y a una aculturación. Sin embargo, los artículos de revistas publicadas entre 1990 y 1992 que se consultaron para este trabajo ponen más énfasis en lo primero, lo que ha redundado en darle a este artículo un tono más positivo de lo que es nuestra percepción de la realidad.

Bibliografía

- Benado, Edith (1992): La participación como condición para el desarrollo social en el proceso de descentralización del Estado, Santiago de Chile, febrero, mimeo.
- Bourliand, Jean, Olivier Dollfus y Evelyne Mesclier (1991): Pérou: stratégies paysannes en situation d'instabilité (1990-1991), *Problèmes d'Amérique Latine -Fin des réformes agraires et nouvelles stratégies paysannes*, Trimestriel N° 3, nouvelle série, París, La documentation française, octubre-diciembre.
- Burke, Peter J. (1991): Identity processes and social stress, *American Sociological Review*, vol. 56, N° 6, Washington, D.C., American Sociological Association, diciembre.
- Chonchol, Jacques (1990): Modernización agrícola y estrategias campesinas en América Latina, *Revista internacional de ciencias sociales*, París, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junio.
- Fassin, Didier (1991): Equateur: les nouveaux enjeux de la question indienne, *Problèmes d'Amérique Latine -Fin des réformes agraires et nouvelles stratégies paysannes*, Trimestriel N° 3, nouvelle série, París, La documentation française, octubre-diciembre.
- Flórez Malagón, Alberto G. (1990): La escuela de la economía moral. Algunas de sus limitaciones para el análisis de lo político en lo campesino, *Cuadernos de agroindustria y economía rural*, N° 26, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, agosto.
- Fox, Jonathan (1990): Editor's introduction. The challenge of rural democratisation: perspectives from Latin America and the Philippines, *The Journal of Development Studies*, vol. 26, N° 4, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., julio.
- _____ (1992): Democratic rural development: leadership accountability in regional peasant organizations, *Development and Change*, vol. 23, N° 2, La Haya, Instituto de Estudios Sociales, Sage Publications, abril.
- Gros, Christian (1991): Réforme agraire, démocratie et modernisation: réflexions à partir de la Colombie et du Brésil, *Problèmes d'Amérique Latine -Fin des réformes agraires et nouvelles stratégies paysannes*, Trimestriel N° 3, nouvelle série, París, La documentation française, octubre-diciembre.
- Grzybowski, Cândido (1990): Rural workers movements and democratisation in Brasil, The challenge of rural democratisation: perspectives from Latin America and the Philippines, *The Journal of Development Studies*, vol. 26, N° 4, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., julio.
- Hataya, Noriko (1992): Urban-rural linkage of the labor market in the coffee growing zone in Colombia, *The Developing Economies*, vol. XXX, N° 1, Tokio, Institute of Developing Economies, marzo.
- Healy, Kevin (1991): Political ascent of Bolivia's peasant coca leaf producers, *The Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 33, N° 1, Miami, Estados Unidos, Universidad de Miami, Institute of Interamerican Studies, primavera.
- Heckathorn, Douglas D. (1990): Collective sanctions and compliance norms: a formal theory, *American Sociological Review*, vol. 55, N° 3, Washington, D.C., American Sociological Association, junio.
- Hoben, Allan y Robert Hefner (1991): The integrative revolution revisited, *World Development*, vol. 19, N° 1, Oxford, Pergamon Press.

- Informativo Campesino*, El fenómeno migratorio afecta con fuerza a familias campesinas, Asunción, marzo de 1992.
- Macy, Michael W. (1991): Chains of cooperation: threshold effects in collective action, *American Sociological Review*, vol. 56, N° 6, Washington, D.C., American Sociological Association, diciembre.
- Molm, Linda D. (1990): The dynamics of power in social exchange, *American Sociological Review*, vol. 55, N° 3, Washington, D.C., American Sociological Association, junio.
- Muriedas, María del Pilar (1988): *Familia y crisis económica en México*, Serie estudios y documentos Unidad Regional de Ciencias Humanas y Sociales para América Latina y el Caribe, N° 6, Caracas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), septiembre.
- Ortega, Marvin (1990): The State, the peasantry and the Sandinista revolution, The challenge of rural democratisation: perspectives from Latin America and the Philippines, *The Journal of Development Studies*, vol. 26, N° 4, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., julio.
- Paré, Luisa (1990): The challenges of rural democratisation in México, The challenge of rural democratisation: perspectives from Latin America and the Philippines, *The Journal of Development Studies*, vol. 26, N° 4, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., julio.
- Parsons, Talcott (1990): Prolegomena to a theory of social institutions, *American Sociological Review*, vol. 55, N° 3, Washington, D.C., American Sociological Association, junio.
- Pérez Rojas, Niurka y Elena Díaz González (1988): *La familia cubana*, Serie estudios y documentos Unidad Regional de Ciencias Humanas y Sociales para América Latina y el Caribe, N° 6, Caracas, UNESCO, septiembre.
- Petersen, Trond y Kenneth W. Koput (1991): Density dependence in organizational mortality: legitimacy or unobserved heterogeneity? *American Sociological Review*, vol. 56, N° 3, Washington, D.C., American Sociological Association, junio.
- Revesz, Bruno (1991): Pérou: vingt ans après la réforme de la périphérie agraire, les impuissances de l'Etat, *Problèmes d'Amérique Latine - Fin des réformes agraires et nouvelles stratégies paysannes*, Trimestriel N° 3, nouvelle série, Paris, La documentation française, octobre-diciembre.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (1990): Liberal democracy and *ayllu* democracy in Bolivia: the case of Northern Potosí. The challenge of rural democratisation: perspectives from Latin America and the Philippines, *The Journal of Development Studies*, vol. 26, N° 4, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., julio.
- Rodríguez, América (1988): *Familia y crisis en El Salvador de hoy*, Serie estudios y documentos Unidad Regional de Ciencias Humanas y Sociales para América Latina y el Caribe, N° 6, Caracas, UNESCO, septiembre.
- Stokes, Randall y Andy B. Anderson (1990): Disarticulation and human welfare in less developed countries, *American Sociological Review*, vol. 55, N° 1, Washington, D.C., American Sociological Association, febrero.
- Venezuela, Ministerio de la Familia (1992): *La familia en una época de crisis y transformaciones de la sociedad venezolana* (LC/R. 1074), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mayo.
- Zamosc, León (1990): The political crisis and the prospects for rural democracy in Colombia, The challenge of rural democratisation: perspectives from Latin America and the Philippines, *The Journal of Development Studies*, vol. 26, N° 4, Londres, Frank Cass & Co. Ltd., Julio.